

Arbitraje en Venezuela: Realidad y perspectivas. Percepción del arbitraje en Venezuela. Reporte de la Encuesta 2024 del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias

Fernando Sanquírigo Pittevil*, Rodrigo Farías Díaz** y Caterina Jordan Procopio***

Principia No. 11–2024 pp. 1-13

Resumen: La investigación evidencia alta confianza en el arbitraje en Venezuela, aunque con menor preferencia práctica frente a medios no adversariales. Los resultados muestran brechas entre percepción y uso efectivo, influenciadas por factores judiciales y culturales. Se plantea fortalecer estrategias institucionales para consolidar el arbitraje como mecanismo clave de estabilidad comercial.

Abstract: The research reveals strong confidence in arbitration in Venezuela, though with lower practical preference compared to non-adversarial methods. Results show gaps between perception and actual use, influenced by judicial and cultural factors. Institutional strategies are needed to strengthen arbitration as a key mechanism for commercial stability.

Palabras Claves: Arbitraje comercial | Venezuela | Confianza institucional | Centros de arbitraje | Medios alternativos de resolución de conflictos | Estadística jurídica

Keywords: Commercial arbitration | Venezuela | Institutional trust | Arbitration centers | Alternative dispute resolution | Legal statistics

* Director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias. Adjunct Professor and Senior Fellow de University of Missouri. Senior Counsel en Dentons.

** Abogado Magna Cum Laude de la Universidad Monteávila. Subdirector de Investigación del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias. Egresado del Programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monteávila. Asociado en Dentons.

*** Abogado Cum Laude de la Universidad Monteávila. Coordinadora de proyectos del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias. Certificado de Derecho Internacional Privado en la Academia Internacional de la Haya. Egresada del Programa de Estudios Avanzados en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad Monteávila.

Sumario: I. Introducción, II. Justificación, III. Metodología Utilizada, IV. Antecedentes de la investigación, V. Demografía, A. Edad y Género, VI. Experiencia, A. Rol como árbitros, B. Participación en arbitrajes, C. Participación nacional vs. Internacional, D. Tipos de arbitraje, VII. Confianza, A. Arbitraje como institución vs. Arbitraje en Venezuela, B. Centros de arbitraje, VIII. Preferencia, A. Medios alternativos de resolución de controversias, B. Preferencia en las empresas, C. Tipos de arbitraje, D. Centros de arbitraje, IX. Conclusión

I. Introducción

La presente investigación constituye el resultado de un esfuerzo colectivo desarrollado por el equipo investigador del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias (CIERC), orientado a llenar un vacío histórico en la producción académica venezolana sobre el arbitraje comercial en este país. Su elaboración no hubiera sido posible sin el acompañamiento del comité de investigación, integrado por Adriana Vaamonde y Diego Castagnino, a quienes expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su apoyo constante, sus orientaciones técnicas y los valiosos comentarios que enriquecieron cada etapa del trabajo. La colaboración de este comité resultó fundamental para garantizar el rigor metodológico, la claridad en la interpretación de los datos y la solidez en las conclusiones alcanzadas.

Este informe se erige, en consecuencia, como una contribución académica que combina la experiencia práctica de los encuestados con la reflexión crítica del equipo investigador y de su comité asesor. La suma de esfuerzos permitió consolidar una investigación pionera, que

busca ofrecer insumos objetivos y útiles para la comunidad jurídica, empresarial y arbitral venezolana, en aras de fortalecer el conocimiento, promover el debate informado y consolidar el arbitraje como herramienta esencial de estabilidad y desarrollo en el comercio nacional e internacional.

II. Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de atender un vacío notorio en el ámbito jurídico venezolano: la carencia de indicadores fiables acerca de la percepción del arbitraje comercial en Venezuela. Hasta ahora, los estudios disponibles se han limitado a apreciaciones teóricas o a recuentos aislados de decisiones judiciales, sin ofrecer una base empírica que permita evaluar de manera sistemática el funcionamiento de los mecanismos arbitrales en el país. Esta ausencia de información concreta ha generado incertidumbre y desconocimiento de datos empíricos tanto para los usuarios como para las instituciones que promueven el arbitraje.

El objetivo central de este estudio radica en llenar ese vacío mediante la recolección y análisis de datos estadísticos rela-

tivos a la experiencia, confianza y preferencias de los usuarios, atendiendo específicamente a empresarios, abogados en ejercicio y consultores jurídicos de empresas. Con esta información se pretende diseñar estrategias que fortalezcan el arbitraje, beneficiando a las instituciones arbitrales, ofreciendo herramientas a los operadores económicos y apoyando la labor de los abogados especializados. La finalidad última es consolidar el arbitraje como un instrumento esencial para la estabilidad comercial en Venezuela.

III. Metodología utilizada

La metodología aplicada en la investigación partió de la identificación de la población objetivo, conformada por tres grupos claramente delimitados: abogados de práctica privada, abogados de práctica corporativa y empresarios. La selección de los encuestados respondió a un criterio de prioridad basado en el nivel de seniority profesional, en virtud de que son precisamente quienes adoptan o rechazan el arbitraje en la práctica, moldeando con sus decisiones la evolución y consolidación de este mecanismo en el ámbito económico y jurídico.

Con el fin de obtener información precisa, se elaboró un cuestionario diferenciado por grupo demográfico, aunque con un núcleo común de preguntas relativas a experiencia, confianza y preferencia en el arbitraje, siempre manteniendo la confidencialidad de los participantes en las encuestas. Esta estructura permitió generar datos comparativos entre

cada categoría profesional. La recolección de las respuestas se realizó de octubre a diciembre de 2024, mediante un enlace en línea seguro, garantizando la confidencialidad, transparencia y fiabilidad de la información, contando con el respaldo de colegios profesionales, cámaras empresariales y las redes académicas del CIERC.

Los resultados se procesaron bajo técnicas de estadística descriptiva, incorporando intervalos de confianza al 90%, lo que asegura la validez de las conclusiones y otorga un alto nivel de fiabilidad a la interpretación de los hallazgos. Este procedimiento metodológico robusto asegura que los datos recabados no solo reflejen percepciones individuales, sino que representen tendencias reales dentro de la comunidad jurídica y empresarial, ofreciendo una base objetiva para futuros desarrollos y estrategias en materia de arbitraje comercial en Venezuela.

IV. Antecedentes de la investigación

En Venezuela no existen estudios estadísticos integrales que permitan evaluar con rigor el desarrollo del arbitraje comercial, lo cual resalta la originalidad y pertinencia de la presente investigación. Algunos trabajos previos han ofrecido datos indirectos, como *Tendencias en el arbitraje financiero en Venezuela* (2015), auspiciado por el Club Español del Arbitraje y dirigido por Fred Aarons, el cual recoge información específicamente sobre controversias financieras, o el estudio de Pedro Rengel *Jurispruden-*

cia sobre nulidad de laudos arbitrales en Venezuela (2024), que recopila criterios judiciales y evidencia, aunque de manera indirecta, porcentajes de laudos anulados en Venezuela.

Por su parte, los Centros de Arbitraje venezolanos han manejado y divulgado cifras en presentaciones privadas, pero dichas estadísticas resultan aisladas, no verificables y carentes de parámetros que permitan comparaciones confiables con investigaciones académicas. En el ámbito internacional, destacan encuestas como las promovidas por Queen Mary University en alianza con firmas especializadas, cuyo enfoque es global y de alcance comparativo. Estos *surveys* incluyen una muestra demográfica semejante a la nuestra –abogados privados, abogados corporativos y empresarios–, lo que permite tomar sus resultados como referencia, aunque sin sustituir la necesidad de un estudio adaptado a la realidad venezolana.

V. Demografía

La recolección de datos permitió obtener 92 respuestas válidas, de las cuales el 40,22 % correspondió a consultores jurídicos, el 11,96 % a empresarios y el 47,83 % a abogados en ejercicio. Dentro de este último grupo, el 38,89 % trabaja en firmas de abogados, el 15,28 % ejerce de manera independiente y el 45,83 % se desempeña como consultor jurídico. Estos porcentajes configuran una muestra suficientemente equilibrada y representativa para efectos de la

investigación, lo que refuerza la solidez del análisis estadístico realizado.

La relevancia de esta composición se aprecia al compararla con estudios internacionales de referencia. Queen Mary University, a través de sus reportes periódicos, ha recogido cifras similares aunque en un contexto de más de cincuenta países. En particular, el Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration (2018) consolidó 922 respuestas, de las cuales un 47 % provenía de abogados de práctica privada, un 10 % de abogados corporativos y un 20 % de empresarios u otros actores. La semejanza en la distribución confirma la pertinencia de la muestra de esta investigación.

Si bien la encuesta de Queen Mary tiene un enfoque global y eminentemente internacional, su estructura metodológica resulta un punto de contraste valioso para la presente investigación. El hecho de que nuestro estudio logre reunir 92 respuestas únicamente dentro del contexto venezolano constituye un logro significativo, pues ofrece un panorama específico sobre las percepciones del arbitraje comercial en el país. Así, los hallazgos obtenidos adquieren una relevancia local comparable en términos de rigor y representatividad a los estándares internacionales.

A. Edad y Género

Los resultados de género evidencian una marcada predominancia masculina en el arbitraje venezolano. En el segmento de

abogados de firmas, el 79,52% son hombres frente a un 20,48% de mujeres; en los consultores jurídicos, 66,66% son hombres y 33,33% mujeres; y entre los empresarios, 70% son hombres y 30% mujeres. En términos globales, el 73,20% de la muestra corresponde a hombres, mientras que apenas el 26,8% a mujeres, reflejando una brecha evidente en la participación femenina en el sector arbitral.

Para validar esta tendencia, se efectuó un análisis comparativo con listas oficiales de árbitros de instituciones venezolanas, confirmándose cifras similares: en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, 84% son hombres y 16% mujeres; mientras que en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje los porcentajes alcanzan 84,3% de hombres y 15,7% de mujeres. Estas cifras corroboran que la preeminencia masculina no solo se refleja en nuestra encuesta, sino también en la composición institucional de los cuerpos arbitrales en el país.

En cuanto a la distribución etaria, los datos son consistentes con el propósito de medir población con capacidad de decisión. Solo el 6,2% corresponde a personas de 30 años o menos, mientras que 19,8% se ubica entre 31 y 40 años, 30,9% entre 41 y 50 años, 23,5% entre 51 y 60 años, y 19,8% tiene 61 años o más. Al agrupar a los mayores de 41 años, se obtiene un 74,2% del total, lo que confirma la concentración de poder decisorio en los segmentos de mayor edad.

El cruce de variables entre edad y género revela un patrón constante: en todos los segmentos predomina la participación masculina, aunque con ligeras variaciones. En el grupo de 30 años o menos, 60% son hombres y 40% mujeres; en el de 31 a 40 años, 75% son hombres y 25% mujeres; entre 41 y 50 años, 76% son hombres y 24% mujeres; de 51 a 60 años, 73,68% son hombres y 26,32% mujeres; y en el segmento de 61 años o más, 68,75% son hombres y 31,25% mujeres. Este comportamiento confirma una presencia minoritaria, aunque sostenida, de mujeres en todos los rangos etarios.

VI. Experiencia

A. Rol como árbitros

Del total de respuestas válidas, se determinó que el 40,7% de los encuestados no son árbitros, mientras que el 57,3% afirmó desempeñar dicha función, sin que ello implique necesariamente pertenecer a listas formales de árbitros. Dentro de este grupo, el 46,81% ejerce en firmas de abogados, el 34,04% actúa como consultor jurídico y el 19,15% corresponde a abogados en libre ejercicio, lo que refleja la diversidad de trayectorias profesionales de quienes integran la comunidad arbitral en Venezuela.

En relación con la pertenencia a listas institucionales, los resultados muestran que el 72,34% está inscrito únicamente en listas nacionales, el 2,13% en internacionales, y un 25,53% en ambas, lo que significa que un 27,66% de los árbitros

venezolanos encuestados mantiene alguna vinculación internacional. No obstante, en términos prácticos, la mayoría desarrolla su actividad predominantemente en el ámbito local, confirmando el carácter interno del arbitraje en la práctica profesional venezolana.

La data también evidencia que el 89,36% de quienes se identifican como árbitros ha sido nombrado al menos una vez, mientras que un 10,64% nunca ha tenido la oportunidad de actuar efectivamente en esa calidad. En cuanto al nivel de experiencia, el 45,65% declaró haber participado en uno a cinco arbitrajes, el 21,74% entre seis y diez, el 13,04% entre once y quince, y apenas un 8,70% en más de dieciséis casos. Estos resultados permiten concluir que, aunque existe una base significativa de profesionales designados como árbitros, la experiencia acumulada en número de arbitrajes sigue siendo limitada en términos absolutos.

En lo relativo a la condición en que los encuestados han sido designados como árbitros, los resultados reflejan una diversidad de roles que evidencia la amplitud de la experiencia acumulada. El 71,4% indicó haber sido nombrado como co-árbitro, mientras que un 66,7% manifestó haber actuado como árbitro único, el 54,8% como árbitro de emergencia y el 50% como presidente del tribunal. Estos datos muestran una participación heterogénea y equilibrada en las distintas modalidades de designación arbitral.

B. Participación en arbitrajes

Los resultados obtenidos en relación con la suscripción de cláusulas arbitrales muestran que el 93,2% de los encuestados ha pactado cláusulas de arbitraje en sus contratos, mientras que solo el 6,8% manifestó no haberlo hecho. Este dato inicial revela una marcada tendencia a incluir el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias en la contratación mercantil venezolana, lo que confirma la presencia de la institución en la práctica jurídica y empresarial, aunque su aplicación concreta requiere un análisis más detallado.

Al indagar sobre la materialización de esas cláusulas, se preguntó a consultores jurídicos y empresarios (con el fin de obtener data únicamente por parte de las empresas) si habían participado efectivamente en procedimientos arbitrales. El 61,7% respondió afirmativamente y el 38,3% negativamente, lo que demuestra que, si bien la suscripción de cláusulas es elevada, su activación en arbitrajes concretos no alcanza el mismo nivel. Asimismo, en cuanto a la frecuencia de participación, un 65,70% refirió haber intervenido en entre cero y cinco arbitrajes, un 17,10% en seis a diez, y otro 17,20% en más de once, evidenciando una concentración significativa en experiencias limitadas.

En términos generales, el 76,83% de la muestra ha estado involucrada en arbitrajes y el 23,17% no lo ha estado. Al segmentar la data por grupos, se observa que el 94,87% de los abogados en ejer-

cicio ha participado en procedimientos arbitrales, frente al 70,59 % de los consultores jurídicos y apenas un 22,22% de los empresarios. Consideramos que esta diferencia sugiere que la práctica arbitral en Venezuela se encuentra fuertemente vinculada al quehacer profesional de los abogados, mientras que los empresarios participan de manera más esporádica, lo que incide en la percepción de utilidad del mecanismo en el sector económico.

C. Participación nacional vs. internacional

El estudio también exploró la experiencia arbitral en clave nacional e internacional bajo tres dimensiones: participación en Centros de Arbitraje, distinción entre arbitrajes nacionales e internacionales, y vinculación con la sede del procedimiento.

En cuanto a instituciones, los encuestados reportaron mayor intervención en centros venezolanos (65.5%): CEDCA (32,7%), CACC (31,5%) y CCCAM (1,3%), seguidos por ICC (16,7%), AAA/ICDR (7,3%), CIADI (4%), TAS/CAS (2%), y otros (4,7%).

Respecto de la vinculación nacional e internacional de los arbitrajes, un 31,7 % indicó haber participado únicamente en procedimientos nacionales, un 7,9 % exclusivamente en internacionales, mientras que la mayoría, un 60,3 %, declaró haber intervenido en ambos. Este dato revela que la práctica arbitral venezolana, aunque arraigada en instituciones

locales, mantiene un vínculo importante con foros internacionales, confirmando una doble dimensión del arbitraje en la práctica profesional de los usuarios encuestados.

En relación con la sede de los arbitrajes, el análisis arrojó dos perspectivas. A nivel general, un 61% participó en arbitrajes con sede fuera de Venezuela y un 39% lo hizo únicamente dentro del país. De ese 61% total, el 50% declaró haber tenido entre una y tres experiencias internacionales, un 18,2 % entre cuatro y siete, un 13,6% entre ocho y nueve, y un 18,2% en más de diez ocasiones, lo que sugiere un grupo reducido pero altamente experimentado en sedes extranjeras.

Al segmentar la información en la demografía de árbitros, el 76,1% manifestó haber actuado únicamente en arbitrajes con sede en Venezuela, mientras que un 23,9% declaró experiencia como árbitro en el extranjero. Dentro de este último grupo, un 30% participó entre uno y tres casos, un 20% entre cuatro y seis, un 30% entre siete y nueve, y un 20% en más de diez procedimientos. Estos resultados muestran que, aunque la función arbitral venezolana se concentra en el ámbito doméstico, existe una minoría con proyección internacional significativa.

D. Tipos de arbitraje

En cuanto a los tipos de arbitraje, los resultados reflejan una marcada prevalencia del arbitraje institucional frente al ad

hoc. En términos absolutos, un 93,65% de los encuestados ha participado en procedimientos administrados por instituciones arbitrales, mientras que un 77% señaló haber intervenido en arbitrajes ad hoc. Esta diferencia sugiere que, en la práctica venezolana, existe una preferencia consolidada hacia esquemas organizados bajo el amparo institucional, considerados generalmente más seguros y con mayores garantías de transparencia y control procedimental.

En lo relativo a la distinción entre arbitrajes de derecho y de equidad, la tendencia es aún más clara. Un 82,9 % de los participantes afirmó no haber intervenido nunca en arbitrajes de equidad, mientras que solo el 17,1 % declaró haber participado en entre uno y tres casos de esa naturaleza. Este hallazgo confirma que, dentro de la cultura arbitral venezolana, predomina el arbitraje de derecho como mecanismo preferido para la resolución de controversias, en concordancia con la tradición jurídica nacional y la práctica internacional comparada.

La perspectiva cambia ligeramente al considerar la experiencia específica de los árbitros. En este grupo, un 23,9 % señaló haber participado en arbitrajes de equidad y un 76,1 % nunca lo ha hecho. De quienes sí han intervenido en esta modalidad, el 90,9 % indicó haberlo hecho en entre uno y tres casos, mientras que solo un 9,1 % reportó experiencia en entre cuatro y seis arbitrajes de equidad. Estos datos permiten concluir que el arbitraje de equidad se mantiene como

una figura excepcional en Venezuela, aplicada en situaciones puntuales y reservada a un reducido número de profesionales con experiencia en funciones arbitrales.

VII. Confianza

A. *Arbitraje como institución vs. arbitraje en Venezuela*

Los resultados sobre confianza en el arbitraje revelan una aceptación casi unánime de la institución. El 98,9% de los encuestados afirmó confiar en el arbitraje, señalando como principales razones la celeridad del procedimiento (41%) y la especialidad técnica de los árbitros (41%), seguidas por la confidencialidad (9%) y otros factores (9%). Este hallazgo confirma que el arbitraje es percibido como un mecanismo idóneo para resolver controversias, dotado de atributos que lo diferencian claramente de la justicia ordinaria.

Cuando el análisis se centra en el arbitraje en Venezuela, se observa una ligera disminución: el 90,9% manifestó confiar en él, lo que representa una reducción de casi diez puntos respecto de la confianza respecto de la institución. Las causas de confianza en el plano local se explican principalmente por la labor de los centros de arbitraje (75%), seguidos de la *lex arbitri* (14%), la calidad de los árbitros (5%) y, paradójicamente, la percepción de inaccesibilidad del gremio (2%), valorada en sentido positivo como garantía de seriedad, además de otros motivos (4%).

Al segmentar los grupos evaluados (empresarios, consultores jurídicos y abogados en ejercicio) por la sede del arbitraje, emergen diferencias significativas entre los grupos evaluados. Mientras el 56,41% de los abogados en ejercicio expresó mayor confianza en arbitrajes con sede extranjera, un 77,78% de los consultores jurídicos manifestó preferir sede venezolana. En la misma línea, un 60% de los empresarios se inclinó por arbitrajes con sede en Venezuela. Estos datos reflejan una asimetría de confianza: los actores más expuestos a controversias internacionales (abogados en ejercicio) privilegian la sede extranjera, mientras que consultores y empresarios se muestran más proclives al marco doméstico.

En cuanto a las razones de desconfianza hacia el arbitraje en Venezuela, las respuestas se concentraron en dos aspectos concretos. El 88,9% de los encuestados señaló la intervención del poder judicial como el factor que más erosiona la confianza, lo cual confirma la percepción de riesgo frente a la intromisión jurisdiccional. El restante 11,1% atribuyó su desconfianza a la actuación de los centros de arbitraje. Este resultado evidencia que la institucionalidad arbitral goza de aceptación, pero enfrenta un obstáculo crítico en la relación con el aparato judicial.

B. Centros de arbitraje

Aunque un 11,1 % de los encuestados manifestó desconfianza en el arbitraje venezolano atribuyéndola a la actuación

de los centros, los datos revelan una aparente asimetría al analizar de manera directa la confianza en dichas instituciones. En términos generales, el 97,4 % afirmó confiar en los centros de arbitraje, y este porcentaje apenas varía cuando se consulta únicamente a los árbitros, entre quienes el nivel de confianza alcanza el 95,7 %. Estos resultados muestran que la percepción negativa es minoritaria y aislada.

Al profundizar en la calificación de la labor desempeñada por los centros de arbitraje en Venezuela, la mayoría de los encuestados valoró positivamente su desempeño. Así, un 31,6 % los calificó como “muy buenos” y un 55,3 % como “buenos”, mientras que apenas un 11,8 % los consideró “regulares” y un reducido 2,6 % como “malos”. Ninguno de los encuestados los catalogó como “muy malos”. Esta misma distribución se repite casi de forma idéntica entre quienes ejercen funciones de árbitros, lo que confirma que la institucionalidad arbitral venezolana cuenta con un respaldo sólido en términos de legitimidad y desempeño percibido.

VIII. Preferencia

A. Medios alternativos de resolución de controversias

Al preguntar a los encuestados cuál medio de resolución de controversias prefieren, las respuestas se distribuyeron de manera plural: un 34,1% optó por “depende”, un 27,3% por “arbitraje”, un 17% por “mediación/conciliación”, un

15,9% por “negociación”, un 3,4% por “litigio” y un 3,4% declaró no tener preferencia. Entre los abogados en ejercicio, la tendencia se mantiene, aunque con ligeras variaciones: un 41,5% respondió “depende” y un 31,7% eligió “arbitraje”, confirmando una mayor inclinación profesional hacia este mecanismo.

El elevado porcentaje de respuestas en la categoría “depende” concluimos que refleja un conocimiento estratégico de los mecanismos disponibles, evidenciando que los usuarios en Venezuela tienden a escoger la vía más adecuada en función de las particularidades de cada caso. Esta percepción se refuerza al analizar la preferencia sobre el uso combinado de mecanismos junto al arbitraje: solo un 9,6% se inclinó por emplear exclusivamente el arbitraje, frente a un 42,3% que prefiere combinarlo con otros medios y un 48,1% que lo haría dependiendo del caso concreto.

De este 90,4% que acepta la combinación o flexibilidad, un 45,4% señaló que preferiría complementarlo con mediación o conciliación, un 36,4% con negociación, un 13,6% dejó la elección sujeta al caso específico y un 4,5% declaró no tener preferencia definida. Consideramos que estos resultados evidencian una clara preferencia por mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, lo que apunta hacia una cultura de resolución más colaborativa en el ámbito empresarial y jurídico venezolano.

Finalmente, dentro del 27% que expresó preferencia exclusiva por el arbitraje, las razones principales se orientaron hacia su eficiencia (70,97%), seguidas por el conocimiento práctico de su funcionamiento (16,13%) y, en menor medida, por la confianza que inspira la institución (12,90%). Concluimos que este hallazgo confirma nuestra hipótesis que la elección del arbitraje responde sobre todo a consideraciones de eficacia y utilidad, más que a factores subjetivos de credibilidad o prestigio.

B. Preferencia en las empresas

Cuando se consultó a las empresas –considerando conjuntamente a empresarios y consultores jurídicos– sobre cuál medio de resolución de controversias consideran más apropiado, los resultados reflejaron una clara inclinación hacia mecanismos no adversariales: un 39,1% optó por mediación o conciliación, un 30,4% por arbitraje, un 28,3% por negociación y solo un 2,2% por litigio. Así, el 67,4 % de las respuestas se concentró en opciones que privilegian la cooperación, la eficiencia y la preservación de relaciones comerciales frente a la confrontación jurisdiccional.

Dentro del 30,4% que identificó al arbitraje como el medio más adecuado para las empresas, las razones principales fueron su celeridad (40,7%), la confidencialidad del procedimiento (25,9%), la especialidad de los árbitros (18,5%), los costos (11,1%) y, en menor medida, la determinación del derecho aplicable (3,7%). Estos datos confirman que la va-

loración empresarial del arbitraje se fundamenta en aspectos pragmáticos vinculados a la rapidez, la reserva y la calidad técnica del proceso, más que en consideraciones formales.

Al contrastar la preferencia con la utilización efectiva de los medios de resolución de controversias, se observa una curva distinta. El 43,5% de las empresas reportó emplear principalmente la negociación, un 32,6% la mediación o conciliación, un 8,7% el arbitraje, un 13% el litigio y un 2,2% otros medios. La tendencia hacia mecanismos no adversariales se mantiene (76,1%), aunque se evidencia una discrepancia relevante: el litigio, que apenas registra un 2,2% de preferencia, alcanza un 13 % en su uso real, mientras que el arbitraje, con un 30,4% de preferencia, descende a un 8,7% en su utilización efectiva.

Concluimos que esta divergencia entre preferencia y uso práctico revela un desfase estructural en la práctica empresarial venezolana: pareciera que, si bien las empresas reconocen al arbitraje como un mecanismo apropiado y deseable, recurren con mayor frecuencia al litigio que puede pensarse es por factores externos como la disponibilidad, los costos iniciales o la inercia institucional. Ello plantea un reto para las instituciones arbitrales y los profesionales del sector, quienes deben diseñar estrategias para cerrar la brecha entre la valoración positiva y la utilización efectiva del arbitraje.

C. Tipos de arbitraje

En materia de preferencia respecto de la sede del arbitraje, los encuestados mostraron una ligera inclinación hacia Venezuela: un 55,6% manifestó preferir que el arbitraje tenga sede en Venezuela, frente a un 44,6% que optó por una sede internacional. Este dato resulta revelador al compararse con la confianza en el arbitraje venezolano, que alcanza un 90,9%, lo que evidencia que la confianza institucional no necesariamente se traduce en una preferencia práctica por establecer la sede en el país.

Dentro del 44,6% que no prefiere un arbitraje con sede en Venezuela, el 8,9% indicó que su elección depende del caso concreto, el 2,2% manifestó preferir siempre una sede fuera del país, un 11,1% se inclinó por Estados Unidos de América, otro 11,1% señaló jurisdicciones amigables al arbitraje, un 4,4% eligió Francia y un 6,7% mencionó otras opciones. Estos resultados nos llevan a concluir que, aunque la confianza general es elevada, la búsqueda de neutralidad, previsibilidad y solidez institucional motiva a muchos usuarios a optar por sedes extranjeras.

Respecto de la modalidad institucional o ad hoc, un 80,52% de los encuestados expresó preferencia por el arbitraje institucional, un 10,38% lo condicionó al caso específico, un 6,49% no mostró preferencia definida y solo un 2,60% se inclinó por el arbitraje ad hoc. Entre los árbitros, esta curva se intensifica: el

90,3% manifestó preferir el arbitraje institucional, confirmando que quienes poseen experiencia directa en la conducción de procesos valoran particularmente las ventajas de un esquema reglado y asistido por una institución.

Las razones que explican la preferencia por el arbitraje institucional se centran en la organización del procedimiento (30,3%), la seguridad y confianza derivadas de un marco normativo establecido (28,2%), la reputación de los centros de arbitraje (17,6%), la celeridad (12,7%) y la posibilidad de elegir árbitros (11,3%).

Cabe destacar la disonancia entre confianza y preferencia: aunque el 97,4% confía en los centros de arbitraje, solo un 17,6% los señaló como razón principal de su preferencia; y aunque un 41% confía en el arbitraje por su celeridad, apenas un 12,7% citó este factor como motivo de elección de este tipo de arbitraje. Esto nos parece indicar que, más allá de la confianza, los usuarios privilegian la certeza y la organización procedimental como elementos diferenciadores en su decisión efectiva.

D. Centros de arbitraje

Los datos recabados evidencian una marcada preferencia por los centros de arbitraje en Venezuela: un 85,33% de los encuestados optó por ellos frente a un 14,66% que señaló preferir centros extranjeros. Entre las razones que sustentan esta inclinación destacan los costos (28,9%), la confianza en el centro (19,7%), la ubicación geográfica

(19,7%), la especialidad de los árbitros (11,8%), el reglamento aplicable (9,9%), el tiempo de resolución (7,2%) y, en menor medida, otros factores (2,6%).

En contraste, quienes prefieren centros de arbitraje en el extranjero lo hacen principalmente por la confianza en la institución (33,3%), la especialidad de los árbitros (16,7%), la ubicación (12,5%), el reglamento (12,5%) y otros motivos diversos (25%). Estos resultados muestran que, mientras la elección local está motivada por factores prácticos y económicos, la internacional se orienta hacia elementos vinculados a la reputación y calidad técnica de las instituciones arbitrales.

Al profundizar sobre los factores que los encuestados consideran relevantes para seleccionar un centro de arbitraje, se destaca en primer lugar la composición de las listas de árbitros (29,03%), seguida de las tarifas (26,45%), la ubicación del centro (19,35%), el método de elección de los árbitros (16,77%), el reglamento (4,52%), la capacidad administrativa del centro (2,52%) y, finalmente, otros criterios (1,30%). Esto parece confirmar que los usuarios priorizan tanto la calidad técnica como la accesibilidad económica en su decisión.

En cuanto a la preferencia entre los centros venezolanos, la diferencia es contundente: el 85,53 % se inclinó por el CEDCA frente a un 14,47 % que eligió el CACC. Esta tendencia se mantiene incluso entre los árbitros consultados, de

los cuales el 80,43 % favoreció al CEDCA y el 19,57 % al CACC.

En el ámbito internacional, la distribución no es más equilibrada: un 48,68 % manifestó no tener preferencia por ningún centro en particular, un 46,05 % se inclinó por la ICC, mientras que el resto señaló otras instituciones como CIAM, ICDR, LCIA y SCC.

IX. Conclusión

La investigación realizada pone de manifiesto la necesidad de suplir un vacío histórico en el ámbito arbitral venezolano: la ausencia de indicadores confiables que permitan conocer y medir la realidad de este mecanismo. A través de una metodología robusta, con un muestreo representativo de empresarios, consultores jurídicos y abogados, se logró obtener información inédita sobre la experiencia, confianza y preferencias de los usuarios. Este esfuerzo constituye un aporte fundamental para el desarrollo del arbitraje como institución en el país.

Los resultados evidencian un nivel muy alto de confianza en el arbitraje como institución, alcanzando casi unanimidad entre los encuestados, aunque dicha confianza disminuye levemente al referirse al arbitraje en Venezuela. La diferencia nos parece revelar que los problemas no radican en el mecanismo en sí, sino en factores asociados a la relación con el poder judicial y a la percepción de ciertas instituciones. Este hallazgo es esencial para entender los retos que enfrenta el arbitraje en el plano local.

En materia de preferencias, los datos muestran una clara inclinación hacia los medios no adversariales de resolución de conflictos, en especial la mediación y la conciliación, que pareciera que resultan más atractivos para las empresas. No obstante, el arbitraje mantiene un lugar destacado como mecanismo eficiente, especializado y confiable, aunque persiste una brecha entre la preferencia manifestada y su utilización efectiva. Este desfase concluimos que obedece a factores estructurales y culturales que limitan su uso real en comparación con la negociación o incluso con el litigio.

Finalmente, los hallazgos ponen en evidencia tanto fortalezas como desafíos. Entre las primeras, destacan la confianza generalizada en los centros arbitrales y la valoración positiva de la especialidad y celeridad del arbitraje. Entre los retos, se encuentra la necesidad de reducir la brecha entre la percepción favorable y el uso práctico, además de fortalecer la proyección internacional de Venezuela como sede arbitral. Este estudio ofrece, así, un punto de partida objetivo para diseñar estrategias que consoliden el arbitraje como herramienta clave de seguridad jurídica y estabilidad comercial.